

Más allá de la coyuntura, hacia otros horizontes de sentido

Bruno Cezar Malheiro¹, Fernando Michelotti², Carlos Walter Porto-Gonçalves³

¹Profesor de la Facultad de Educación del Campo de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (UNIFESSPA); Doctor en Geografía por la Universidad Federal Fluminense (UFF). **E-mail:** brunomalheiro84@gmail.com

²Profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (UNIFESSPA); Maestro en Planificación del Desarrollo por el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, Universidad Federal de Pará (NAEA/UFPA) **E-mail:** fmichelotti@ufpa.br

³Profesor Titular del Departamento de Geografía de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Premio “Chico Mendes” en Ciencia y Tecnología del Ministerio del Medio Ambiente (2004). **E-mail:** cwpg@uol.com.br

Fecha de recepción: 20 de Marzo del 2019

Fecha de aceptación: 23 Agosto 2019

RESUMEN

Este artículo corresponde a una reflexión desde la geografía crítica brasilera realizada en el contexto de la emergencia de gobiernos de derecha en América Latina. Los autores sistematizan la experiencia y reflexión del VI Encuentro Tierra y Territorio, en Marabá, Estado de Pará, realizado en noviembre de 2018. En esta comunicación los autores parten de la premisa de que es necesario ir más allá de la perplejidad y la indignación para superar la actual crisis desde una perspectiva emancipadora, con valores fundados en la justicia social, en la libertad, en la defensa de la vida y de la diversidad cultural.

Palabras clave: Brasil; Geografía Política; Comunidades; Gobierno; Desarrollo; Territorio

ABSTRACT

This article corresponds to a reflection from the critical geography brasilera carried out in the context of the emergence of right-wing governments in Latin America. The authors systematize the experience and reflection of the VI Land and Territory Meeting, in Marabá, State of Pará, held in November 2018. In this communication the authors start from the premise that it is necessary to go beyond perplexity and indignation to overcome the current crisis from an emancipatory perspective, with values founded on social justice, freedom, defense of life and cultural diversity.

Keywords: Brazil; Political Geography; Communities; Government; Development; Territory.

Prólogo

“Cuando el horizonte está turbio y los caminos confusos, es tiempo de buscar en la memoria, en nuestra trayectoria, el momento en que nos perdimos en el camino” (de los indígenas Wayuu-Añuu que habitan en las márgenes del lago de Maracaibo, actual Venezuela).

Este artículo debe mucho a la inspiración del lugar donde los autores pudieron escuchar y sentir las contribuciones de varios grupos sociales reunidos en el VI Encuentro Tierra y Territorio, en Marabá, Estado de Pará, en noviembre de 2018. El momento y el lugar de estos hombres y mujeres de todas las regiones de Brasil, e incluso de Chile, de Bolivia, de Colombia, de México y de Venezuela, hablan aquí por la traducción que de ellos hacemos

¿En qué momento nos perdimos en el camino? No podría ser mejor la inspiración para nosotros pensar la coyuntura que se abre luego del resultado de las elecciones brasileñas de 2018, las que nos remiten hacia un claro sentido de regresión conservadora que puede ser vista, por ejemplo, en la pérdida de legitimidad de la mayor parte de los llamados gobiernos progresistas en América Latina y en el ascenso de Donald Trump al frente de la mayor potencia imperialista.

Este texto, fruto del encuentro de intelectuales en movimiento, parte de la premisa de que es necesario ir más allá de la perplejidad y la indignación, lo que parece debe ser tomado en cuenta por todos los que estamos frente a la gran tarea en la que la historia nos ha colocado, cuál es, la de superar la actual crisis desde una perspectiva emancipadora, con valores fundados en la justicia social, en la libertad, en la defensa de la vida y de la diversidad cultural.

La coyuntura brasileña ha puesto al descubierto lo que ha sido el consenso de nuestras clases dominantes en torno al rentismo, ya sea por los negocios del agro, de las aguas, de la minería, entre otros, corporizados a los negocios de los bancos y que son habitados por los tiempos/espacios de la violencia étnica, del racismo, de la violación de la biodiversidad, de la extinción de los saberes de los pueblos y del establecimiento del patriarcado. El “Brasil (en singular) por encima de todo”, es el eslogan que sintetiza la arrogancia de un proyecto histórico para la extinción de todos nuestros muchos Brasiles, mediante una geografía de la indiferencia para la cual la vida es un obstáculo al desarrollo, y más aún,

“Dios por encima de todos” coarta cualquier posibilidad crítica a las ideologías esclavistas, homofóbicas y sexistas que destapan los desagües de un resentimiento contenido, en el cual la ignorancia hace fuerzas para criminalizar a la inteligencia.

Recordemos, sin embargo, que no solo en Brasil sino en toda América Latina acontecieron y no paran de suceder innumerables movilizaciones de carácter local en contra de este régimen de acumulación que, día a día, se torna cada vez más violento. A diferencia de algunos otros analistas que señalan la fragilidad de estas luchas por el hecho de estar localizadas, nosotros destacamos que son tantas las comunidades locales en lucha y en r-existencia que esto debe ser visto como una cualidad positiva y no como un problema. A fin de cuentas, resistir no es solamente reaccionar frente al otro que nos violenta y agrede sino que es, también, la afirmación de formas de existencia que están siendo agredidas y que se niegan a aquellas que nos niegan; he allí, el origen de la r-existencia. La política tradicional, sin embargo, no ha conseguido potenciar estas r-existencias en la construcción de una *otra política*.

El ejercicio analítico que aquí proponemos se sumerge en el contexto intentando no ahogarse en él; reconoce la densidad del presente sin ignorar el valor de la memoria y la posibilidad de renovar nuestros horizontes; cree que es fundamental comprender esta geografía de la indiferencia de un capitalismo rentista que cotidianamente nos violenta, sin perder de vista las geografías que se diseñan desde otras formas de habitar, curar, comer y relacionarse, pues construir un horizonte estratégico más allá del capitalismo nos exige, también, ir más allá de la colonialidad, de esa voluntad de saber y de poder que nos reconstruye a imagen y semejanza del otro que nos violenta.

Brasil, desarrollo y subdesarrollo: los tiempos-espacios coloniales que nos habitan

La cuestión central remite a la necesidad de superar el horizonte de un pragmatismo cortoplacista para que nuestro análisis pueda ser inscrito en un horizonte estratégico verdaderamente revolucionario. Por ello, nuestro horizonte de sentido político no puede ser el año 2022, o las próximas elecciones. Todo indica que si el Estado puede llegar a ser hasta una necesidad (lo que nos parece que ciertamente es), no necesariamente es el lugar de la virtud; sobre todo, en tanto que el mismo da lugar a instituciones políticas separadas de la sociedad. Pues, a fin de cuentas, ya nos había alertado Immanuel Wallerstein (2004) acerca de la estrategia de “los dos pasos”: a saber, el primer paso, tomar el poder del Estado y el segundo paso, a partir del Estado, cambiar el mundo, ya demostró sus límites a lo largo de la historia del siglo XX, cuando la mayor parte de los movimientos de carácter antisistémicos dieron el primer paso, tal como se evidenció con la socialdemocracia o el socialismo revolucionario o el nacionalismo revolucionario que, prácticamente, dominaron el mundo en los años sesenta. Así, es necesario que seamos capaces de vernos en una perspectiva histórica mucho más amplia y, ciertamente, mucho más (auto) crítica.

En Brasil, no es la primera vez que nos vemos frente a una disyuntiva histórica de avance de las fuerzas retrógradas con graves consecuencias para las masas populares. En 1954, “fuerzas ocultas” derribaron al presidente Getúlio Vargas que encabezaba, en aquel momento, la afirmación de un proyecto nacional-popular (con todas las objeciones a las imaginaciones geográficas varguistas de nación, colonialmente definidas a partir de una parte pretendidamente más desarrollada de Brasil), que

sacaría provecho de la crisis del sistema-mundo capitalista desde 1929 y desencadenaría un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Cuando este proceso se preparaba para dar un salto cualitativo, he allí que el nuevo hegemón estadounidense, recuperado de la crisis de 1929 y con sus megaindustrias con capacidad productiva ociosa, luego del enorme esfuerzo de guerra, salió en busca de nuevos mercados. Las “fuerzas ocultas” luego se revelaron, pues, con la muerte de Vargas, el Gobierno que lo sustituyó, el de Juscelino Kubitschek (1956-1961), se mostró ampliamente favorable a los capitales extranjeros, ávidos por apoderarse de nuevos mercados.

Desde la caída de Vargas, las clases dominantes brasileñas se vieron frente a sus propias contradicciones para ejercer la hegemonía política, lo que implicaba el consentimiento de las masas populares. Inmediatamente después del gobierno de Kubitschek, ellas nos ofrecieron una aventura política con Jânio Quadros, y su “escobilla” para limpiar la suciedad de la política. Ocho meses fue el tiempo de gobierno de la aventura, de enero a agosto de 1961. Como el pueblo brasileiro había escogido como vicepresidente a un heredero de Vargas, el Sr. João Goulart, se intentó de cualquier forma impedir su toma de posesión. La movilización popular consiguió garantizarla. Con todo, frente a sus dificultades de apoyo popular, estas mismas clases dominantes nos ofrecieron una nueva aventura con el golpe cívico-militar de 1964, y no es fortuito que los golpistas hayan denominado su golpe como la “Revolución de 1964”. A fin de cuentas, la Revolución estaba a la orden del día, tanto, que hasta la misma derecha, que por definición se presta a la defensa del orden, llamó a su intervención política como “Revolución”.¹

Pasados veintiún años desde el Golpe Militar de 1964, seguidos de una transición por arriba que dejó intactos los poderes de la dictadura (Tancredo-Sarney), las clases dominantes nos ofrecieron una nueva aventura: Fernando Collor de Mello con su estilo Indiana Jones para combatir a los funcionarios cobradores de coimas. Esta vez, la aventura duró un poco más de dos años, dos años y 289 días para ser más exactos, y terminó con la renuncia del aventurero en medio de un proceso de impeachment. Nuestro sistema judicial, luego, lo declararía inocente de todas las acusaciones que privaban en su contra, tal como él no se cansa de jactarse.² Hecha la transición con Itamar Franco, las clases dominantes consiguieron establecer un nuevo pacto político que conformó un amplio bloque que, como sugiere Leda Paulani (2013), inauguró una nueva fase de dependencia derivada de la inserción activa, y por ende subordinada, del país en el circuito de valoración financiera. Una dependencia deseada por las clases dominantes cuya memoria recordaba las iniciativas de insubordinación popular empeñadas en procesos más autónomos de nacional-desarrollismo, al preferir legitimar formas de dependencia internacional a poner en riesgo sus privilegios.

Como la misma Paulani (2008) señala, esta transformación de Brasil en una plataforma de valoración financiera exigió una serie de medidas económicas e institucionales, cuyo símbolo mayor es el Plan Real, que continuó profundizándose durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. Desindustrialización y primarización de las exportaciones, así como sobrevaloración del cambio y una tasa de interés digna de agiotistas, son la otra cara de esta inserción en los circuitos financieros de

¹ Extraño mundo este el que hoy vivimos, donde ni siquiera las izquierdas ponen la Revolución a debate, con la excepción de pequeños grupos políticos.

² Además, dicho sea de paso, que el Supremo Tribunal Federal legitimó el golpe de 1964, prestándole legalidad al aceptar la falsa información de un vacío de poder ya que, supuestamente, el entonces Presidente João Goulart se había fugado del país.

acumulación, lo que garantiza, no solo una remuneración a los capitales volátiles del mundo aquí presentes, sino también oportunidades a las clases dominantes de participar del botín a través de la deuda pública sometida a los intereses financieros. Desde entonces (1994), la deuda pública pasó de poco más de 60 mil millones de reales hasta 740 mil millones (un crecimiento del 1200% en ocho años) en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002); a 1 billón y 500 mil millones (crecimiento del 100%) en los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010); hasta 3 billones (otro 100% de crecimiento) en los gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016); y ya alcanza más de 4 billones en el gobierno ilegítimo de Michel Temer (2016-2018).

La sobrevaloración de la moneda garantizó la importación generalizada para el goce del capital comercial y el consumo de las clases medias, mientras que el país veía caer en un 25% la participación en el PIB del sector industrial en 1994 hasta llegar cerca del 10% en 2017. La historia del Grupo Havan es emblemática de estas políticas rentistas, pues, “en 1999, Luciano Hang percibió el rumbo de la economía con la desvaloración cambiaria y definió un nuevo rumbo para el Grupo Havan que, a partir de entonces, ingresó en el segmento del comercio de apartamentos”, tal como informa el mismo sitio de la empresa.³

La deslegitimación de estas políticas, ya en el segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, proporcionó las condiciones para un nuevo pacto político en Brasil en el que se produce una adhesión popular al nuevo régimen de acumulación que había sido puesto en práctica con el Plan Real, y que se renueva con los sucesivos gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT). Reiteramos que al final de la década de 1990 y el inicio de la década de 2000, la coyuntura regional latinoamericana comenzaba a demostrar los límites de las políticas inspiradas en el Consenso de Washington hasta entonces puestas en marcha. Más aún, estos límites venían siendo públicamente expuestos por amplias movilizaciones populares en América Latina a lo largo de toda la década de 1990, que llegaron, incluso, a derribar varios Gobiernos. En 1999, Hugo Chávez Frías asume el gobierno de Venezuela y un campo autodenominado como “posneoliberal” se forma, en Brasil, con Lula da Silva en 2003; en Bolivia con Evo Morales en 2006; en Ecuador con Rafael Correa en 2007; y en el Uruguay con José Mujica en 2010.

En Brasil, las bases de las políticas puestas en marcha, a saber, la financierización y la exportación de commodities no fueron tocadas. La Carta a los brasileños, orquestada por el Sr. Antonio Palocci, sería conocida también por sus críticos como Carta a los banqueros. Lula da Silva, para nombrar al Presidente del Banco Central, fue a buscar entre los tucanes un banquero, expresidente del Banco de Boston, el Sr. Enrique Meirelles, y no solo lo nombró Presidente del Banco Central de Brasil, sino que lo blindó políticamente al transformar el cargo en Ministerio de Estado. Pero además nombró al Sr. Roberto Rodrigues, presidente de la Asociación Brasileña de Agribusiness (ABAG), como Ministro de Agricultura, y el Sr. Luiz Fernando Furlan, presidente de SADIA, una de las mayores corporaciones mundiales de producción de carnes, también fue nombrado para el Ministerio de Industria y Comercio, lo que da cuenta de la desindustrialización o de la industrialización de la oligarquía del campo, tal como fue implantada la manufactura del ingenio en el periodo colonial.

³ El Grupo Havan (2018) expresa, mejor que cualquier otro, el grado de sumisión ideológica al imperialismo estadounidense al asumirse, en 1994, año del Plan Real, como “la Casa Blanca Brasileña”. Sea lo que fuera que quisieron decir con ello, “con la construcción de un nuevo predio de 7 mil m² [que] tiene los contornos estilizados como la Casa Blanca, sede del Gobierno de los Estados Unidos”, tal como confiesan en su sitio oficial.

Recordemos, de paso, el apoyo encontrado por el PT en una fracción de la clase dominante, a saber, la burguesía interna de grandes corporaciones de ingeniería y de la construcción civil que, de cierta forma, se mueven con relativa autonomía en relación a otros sectores de la burguesía más directamente vinculados al capital financiero internacional, tal como destaca Armando Boito (2018). Es interesante este concepto de burguesía interna accionado por Boito, pues permite escapar del embrollo de la llamada burguesía nacional que ensayaría algún tipo de proyecto nacional, lo que las delaciones de estos empresarios, junto a la Operación Lava Jato, lograron definitivamente disipar.

En medio de este recorrido, el sistema-mundo capitalista moderno-colonial que nos parió desde su primer momento (1492-1500), por primera vez en más de 500 años, deja de tener su centro geoeconómico alrededor del Atlántico Norte, como lo fue bajo las hegemonías ibérica, británica y estadounidense. Desde 2016, China se presenta como el principal Producto Interno Bruto mundial y países como India, Indonesia y Corea del Sur se ubican entre las principales economías del mundo. China, además, desde 2010, ya es el principal socio comercial de América Latina y, desde 2016, el principal inversor en la región.

Es bueno señalar, también, que los organismos internacionales que piensan y planifican la dinámica de acumulación capitalista mundial, como el BID y el BIRD, ya se habían percatado de eso y se anticiparon, en el año 2000, al proponer dos megaproyectos logísticos: el Plan Puebla-Panamá (PPP, luego llamado Plan Mérida), y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Los dos grandes megaproyectos logísticos PPP e IIRSA fueron públicamente anunciados por Vicente Fox, en México, y por Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, como parte de una integración física del continente al capitalismo global, en ese momento, como estrategia de afirmación de la hegemonía estadounidense que caminaba con el ALCA, nueva versión de la Doctrina Monroe.

A diferencia de los intelectuales afectos a la colonialidad de la clase dominante que vieron a sus espaldas la condición latino-americana del Brasil, las conexiones geográficas con los demás países suramericanos y caribeños pasó a ser central para acceder al nuevo centro geográfico del metabolismo industrial del sistema-mundo, ahora ubicado en el Pacífico. A fin de cuentas, somos un país del Atlántico.

Mientras tanto, además del Consenso de Washington con sus políticas de flexibilización de los derechos sociales y la apertura al capital extranjero y, aún más, de un Estado todo poderoso en defensa del capital, hubo otro consenso que revoloteó sobre los Gobiernos arriba mencionados, el Consenso de las Commodities, tal como lo bautizó la socióloga argentina Maristela Svampa (2015), toda vez que, ya a la derecha o a la izquierda, la exportación de productos agrícolas y mineros, como la expansión del capital en contra de los territorios de los pueblos y comunidades tradicionales, fueron la tónica, así como la pérdida de los derechos en la seguridad social.⁴ Los registros de conflictos y de violencia en el campo brasileiro realizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) desde 1985, dan cuenta que fue durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff que los hechos de conflicto y violencia en el campo aumentaron exponencialmente, pues, al tiempo que aumentaba la dependencia de las

⁴ Otra información relevante: fue en el gobierno de Lula da Silva que se produjeron las primeras pérdidas de derechos en la seguridad social.

exportaciones de commodities, se generaba una consecuente expansión del mercado de tierras y un aumento exponencial del consumo de agua por el latifundio del agronegocio y por las empresas mineras.

Resultado de todo esto: desindustrialización generalizada y dependencia típica del subdesarrollo con la dinámica de la acumulación subordinada a la acumulación capitalista externa, sobre todo de China. En fin, en la práctica, pérdida de soberanía y, con ello, desarrollamos el subdesarrollo, de acuerdo a la precisa fórmula de André Gunder Frank (1973), cuando retornamos a la condición colonial de suplidores de materias primas agrícolas y mineras para los centros más dinámicos del capitalismo mundial. Y tal como en el periodo colonial, utilizando la tecnología de punta, como hoy lo hace el agronegocio –“el agro es tech”– así, en el siglo XVI, hacían las plantaciones de caña de azúcar, con la tecnología más moderna que en ese entonces el mundo conocía: los ingenios de azúcar. Ya para ese entonces exportábamos un producto manufacturado, el azúcar, y no materia prima, la caña.

Somos modernos hace más de 500 años con tecnología de punta conviviendo con la injusticia social, teniendo como base el latifundio productivo de la desigualdad social, del racismo y del patriarcalismo por siempre. He allí la modernidad conservadora que nos habita con toda la colonialidad que la acompaña, en tanto que historia de larga duración que conforma nuestra geografía que, a su vez, conforma nuestra historia (a fin de cuentas, el espacio geográfico es acumulación desigual de tiempos, diría Milton Santos). Desde el Plan Real dependemos cada vez más de nuestro sector primario y así, de la hegemonía del latifundio y de la minería y de sus vinculaciones orgánicas en servidumbre voluntaria al capital internacional.

Las jornadas de junio de 2013 manifestaron en las calles los límites de este pacto político con reivindicaciones de todo tipo, desde las que pautaban (1) los intereses más sentidos de la clase trabajadora (“Queremos salud patrón FIFA”, “Queremos educación patrón FIFA”), el movimiento Paso Libre, la desmilitarización de las policías militares, entre otras reivindicaciones populares; (2) el viejo bastón contra la corrupción blandido por las derechas cuando es convenientemente silenciado por las izquierdas,⁵ y para sorpresa de muchos, (3) la manifestación pública en defensa de la dictadura que, muy a pesar del espectáculo, no contaba con apoyo significativo entre los manifestantes.

Por los límites de una política de combate a la pobreza que no enfrentó los problemas estructurales de concentración de propiedad y de la renta, y de la mercantilización de todas las esferas de la vida (tierra, ciudad, educación, salud, vivienda, aire...), no solo se perdió legitimidad frente a las clases subalternas, sino que se promovió una despolitización de la pobreza. Lautier (2014) llega a alertar que la vinculación de programas de transferencia de renta a condicionantes (hijo en la escuela, capacitación profesional) y no a la organización y lucha política, lleva a una contención de las tensiones políticas por una moralización de los pobres y no por la politización de la pobreza. Tales programas expresan, pues, las transformaciones de la vida cotidiana periférica, en sus múltiples dimensiones, en que la racionalidad económica, empresarial y financiera busca subyugar la política, tal como revelan Cabanes, Georges, Rizek y Telles (2011).

⁵ La Operación Lava Jato opera como si fuera la modernización tecnológica de la “escobilla” de Jânio Quadros. La moralización de la política ya nos dio a Jânio Quadros y a Fernando Collor de Mello, en Brasil, así como la Operación Manos Limpias, en Italia, dio a un Silvio Berlusconi.

En fin, cuestiones estructurales y profundas de la sociedad brasileña se salieron por la tangente, o mejor dicho, se abordaron de forma superficial, sin que fuesen debatidas ampliamente en su seno, como la de la distribución de la riqueza y de la propiedad, la cuestión racial, ambiental, regional, de género, de los pueblos y comunidades tradicionales, que quedaron reducidas a la expansión del consumo y no de la ciudadanía, al sistema de cuotas, a la nominación para cargos públicos de mujeres y de negros, a la ampliación de vacantes en las universidades sin ninguna exigencia de compromiso público de los que allí ingresaban, a las transferencias suplementarias de renta sin tocar en la riqueza propiamente dicha, ni en la concentración de la propiedad de la tierra, sin hacer una reforma tributaria que atacara el actual sistema regresivo en el que quien gana menos paga más, mucho menos una reforma agraria y una reforma urbana. No debe causar espanto que las pautas morales fueron más determinantes en la elección de 2018 que las pautas políticas y económicas.

Como quedó claro en las Jornadas de junio de 2013, el PT no tenía más capacidad de organización de las luchas sociales y mostró su fragilidad dada la creciente incapacidad de organización de la alianza entre el bloque en el poder y las clases subalternas, o como nos dice Eliane Brum:

La cuestión más profunda de Brasil seguía siendo la misma: para que haya conciliación de hecho, es necesario que una parte de la población pierda privilegios. Y eso, para las élites y también para parte de la clase media, era –y lo sigue siendo– inaceptable. (2018, s/p)

Desde entonces, la Operación Lava Jato se convirtió en el eje en torno del cual los grandes medios⁶ y el sistema judicial harían sangrar a los Gobiernos petistas, construyendo una narrativa en la que la corrupción y el latrocinio serían cosas exclusivas del PT, aunque con Temer y un Congreso con corruptos protagonizando el impeachment y las políticas que habían sido derrotadas en las elecciones de 2014. En honor a la verdad, dicho sea de paso, estas políticas fueron iniciadas por la presidenta Dilma Rousseff cuando nombró al Sr. Joaquim Levy como Ministro de Hacienda,⁷ el que formara parte de la campaña derrotada de Dilma y que, recientemente, ha sido nombrado para un alto escaño del Gobierno de Jair Bolsonaro. Como se ve, hay continuidad en la discontinuidad y, una vez más, es en torno de la neoliberalización bajo la hegemonía del capital financiero en alianza con las oligarquías latifundistas productoras/exportadoras de commodities y del capital de las grandes corporaciones del agronegocio y de las mineras, con su globalitarismo (Santos, 2005), que se forjó este pacto político en torno del Plan Real.

A la señal del sismo del arreglo económico y político que había sustentado las victorias del bloque en el poder y las alianzas con sectores de las clases subalternizadas, y articulados a las nuevas estrategias del hegemon para América Latina, el 17 de abril de 2016 – exactamente veinte años después de la masacre de Eldorado de los Carajás– los parlamentarios brasileiros, expresando, en su gran mayoría, el patronato más tradicional, transformaron un instrumento contable ampliamente utilizado por varios Gobiernos anteriores y no previsto como crimen de responsabilidad en la Constitución Federal, en motivo para pedir el impedimento de la presidenta. Todo esto, bajo el liderazgo de Eduardo

⁶ La Red Globo de televisión apoyó el golpe y, cincuenta años después, públicamente reconoce su error. ¿Será que habrá que esperar el mismo tiempo para que se pronuncie en torno al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y el impeachment preventivo a Lula da Silva, impedido de ser candidato por el juez Sergio Moro?

⁷ Recordemos que lo hizo sin consultar al partido, tal como lo hizo público el expresidente Lula da Silva en un discurso en Río de Janeiro en la campaña contra del impeachment, frente al Circo Volador.

Cunha, reo en el Supremo Tribunal Federal e involucrado en varios escándalos de corrupción. La Cámara, entonces, acató el proceso de impedimento con amplia mayoría llevándolo al Senado, en un espectáculo mediático sin precedentes en la historia nacional y que demostraría o consolidaría la estructura de un nuevo tipo de golpes en América Latina,⁸ construidos bajo la insignia de la legalidad, bajo la tutela del sistema judicial, de la policía federal, de las casas parlamentarias y de los medios de comunicación, lo que demostraba la fragilidad de las instituciones democráticas construidas en los últimos treinta años.

En líneas generales, la ruptura política en curso fortaleció la fracción banquero-financiera hegemónica (con el ejemplo paradigmático de la Enmienda Constitucional N° 95/2016 del Techo de los Gastos, que limita los gastos sociales, generando saldo para el pago de los servicios de la deuda pública, principal mecanismo de transferencia de recursos del sector público hacia el privado/rentista); alteró la relación de fuerzas no hegemónicas del bloque en el poder, con pérdida de fuerza de las empresas de construcción/ingeniería y el ascenso de las grandes empresas de consumo popular (como por ejemplo, la Havan, entre otras); atacó los derechos laborales con la nefasta intención de reequilibrar la tasa de lucro frente a la reducción de la capacidad de consumo; y lógicamente, fortaleció la producción/exportación de commodities como principal sustento del proyecto de valorización financiera.

En verdad, sea por la renta de la tierra, sea por los intereses, el alargamiento de la apropiación de tierras, de recursos naturales y de toda suerte de bienes públicos y colectivos como proyecto de acumulación, reforzó el poder político oligárquico que, en Brasil, fue muy bien analizado por Raymundo Faoro en su estudio sobre la formación del patronato político brasilero, donde afirma que “la realidad histórica brasileña demostró la persistencia secular de la estructura patrimonial, resistiendo gallardamente, inviolablemente, la repetición, en fase progresiva, de la experiencia capitalista” (Faoro, 2001, p. 869). En fin, el rentismo se tornó en consenso entre las clases dominantes, estructurado y profundizado por las fuerzas de la derecha (Fernando Henrique Cardoso- Partido de la Social Democracia Brasileña [PSDB] y Michel Temer-Movimiento Democrático Brasileño [MDB]), pero sin que fuera políticamente enfrentado y alterado por los Gobiernos progresistas (Lula da Silva-Dilma Rousseff-

⁸ En Venezuela, en 2002, luego de días de cobertura de la red de televisión RCTV, las manifestaciones antichavistas culminan en confrontaciones violentas entre grupos pro y contra Gobierno, siendo que estos últimos, con apoyo militar y sustentación mediática, entran en el Palacio de Miraflores y secuestran a Hugo Chávez, y hacen que las Fuerzas Armadas anuncien a Pedro Carmona, presidente de la federación patronal del país, como primer mandatario, disolviendo la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo y anulando la Constitución de 1999. Chávez consiguió enviar un mensaje de que no había renunciado y retoma su puesto. En Haití, en 2004, no fue diferente; grupos contrarios al Gobierno consiguen tomar la ciudad de Gonaïves, luego Cabo Haitiano y, finalmente, la capital, Puerto Príncipe. Con el discurso de poner fin a la crisis económica y la corrupción, el presidente Jean-Bertrand Aristide es secuestrado por fusileros navales norteamericanos, permaneciendo por más de veinte horas en un avión, lo que hizo que las fuerzas de la ONU produjeran una intervención militar en el país en nombre del restablecimiento del “orden democrático”. En Bolivia, en 2008, por varios días grupos opositores ampliamente apoyados por los medios, liderados por prefectos de la región de la Media Luna, llegaron a organizar referendos para aprobar una especie de declaración de independencia, en mucho, por cuenta de la nacionalización de los recursos naturales y por la aprobación de la nueva Constitución que desagradaba a las oligarquías. En Honduras, en 2009, la propuesta de un plebiscito que permitiría la reelección de Manuel Zelaya, entonces presidente, generó una invasión por grupos militares –a solicitud del Tribunal Supremo– de la casa presidencial para el secuestro del mandatario, lo que culminó en una maniobra del presidente del Congreso, Roberto Micheletti, que consiguió colocarse a sí mismo en la presidencia. En Ecuador, en 2010, luego de una huelga de la policía, el presidente Rafael Correa va hasta el principal cuartel a negociar con los huelguistas, los que realizan un ataque a la comitiva presidencial, de modo que se produce una intervención del Ejército. El presidente fue mantenido cercado en un hospital militar, aunque consigue salir de allí con vida y retoma el cargo. En Paraguay, en 2012, después de la desocupación de una hacienda en la localidad de Curuguaty, que provocó una confrontación entre policías y campesinos sin tierra con el saldo de diecisiete muertos (once campesinos y seis policías), parlamentarios paraguayos aprueban la apertura de un proceso de impeachment, acusando al presidente Fernando Lugo de mal desempeño de sus funciones, por facilitar ocupaciones de tierras y ser inoperante en relación a la violencia. Lugo, que fue el primer presidente paraguayo que en más de sesenta años no pertenecía al Partido Colorado, perdió en la Cámara y vio al Senado aprobar su impedimento.

Partido de los Trabajadores [PT]), que gobernaron el país desde entonces. La participación del banquero Henrique Meirelles entre esas diferentes fuerzas políticas que estuvieron en el Gobierno desde el Plan Real, es la expresión de este pacto que hizo al país ingobernable y la vida de amplios sectores populares un verdadero infierno,⁹ dada la magnitud de la renta nacional que es destinada al capital financiero a través de la financiación de las políticas (que debían ser) públicas, tal como destacamos arriba.

Sin embargo, el rentismo no puede ser visto solo como el rumbo asumido por el proceso de acumulación dependiente, pues él nos dice mucho más sobre nosotros de lo que imaginamos. Las clases dominantes en Brasil, tomando una historia de larga duración, siempre activaron soluciones de mantenimiento de privilegios frente a las crisis. El rentismo es solo la cara económica de la desubicación espacial del capitalismo por la violencia y el genocidio de pueblos y comunidades tradicionales y por la devastación de la naturaleza; del uso indiscriminado del trabajo esclavo (fuimos el último país en abolir la esclavitud en las Américas); del desprecio y disolución de los saberes de los pueblos; y del patriarcalismo como regla de conducta. Los tiempos-espacios de la violencia étnica, del ecocidio, de la esclavitud/racismo, del epistemicidio y del patriarcado, que nos habitan hace más de 500 años, ganaron el vaciamiento en la selección del desarrollo de nuestro subdesarrollo por la expansión de las commodities y la elevación exponencial de la renta financiera, pues esta selección económica es, también, societaria, basada en la difusión violenta de un modo de vida absolutamente refractario a las diferencias y a la justicia social.

Así, los horrores mal resueltos de nuestra historia fueron ganando sus realidades moderno-coloniales en la elevación y naturalización de las muertes en el campo (Brasil, en 2017, fue el país en que más se asesinó a defensores de los derechos humanos, según la ONG Global Witness, al morir 70 campesinos, el mayor número desde 2003, según la Comisión Pastoral de la Tierra [CPT],¹⁰ 110 indígenas asesinados, según el Consejo Indigenista Misionero [CIMI],¹¹ 18 miembros de quilombos asesinados, un aumento del 350% en relación a 2016, según la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas [CONAQ]¹²); en el crecimiento desenfrenado de la deforestación de la Amazonia, especialmente, entre agosto de 2017 y julio de 2018, según el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (IMAZON);¹³ en la banalización de los exterminios en las periferias de las ciudades (fueron 63.880 muertes violentas en 2017, la gran mayoría de jóvenes negros, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública [FBSP]¹⁴); y en la mínima importancia dada a la elevación de los feminicidios y de la LBGTFobia (Brasil tiene la quinta mayor tasa de asesinatos de mujeres en el mundo: 4,8 para cada 100 mil, según los datos de la ONU; y es el país que más mata a homosexuales en el planeta: fueron 445 muertes en 2017, de acuerdo al Grupo Gay de Bahía (GGB),¹⁵ sin olvidar las complicidades del poder político instituido tras el asesinato de la concejala Marielle

⁹ Observamos las precarias condiciones del transporte urbano, de la salud pública, de las escuelas, el desempleo creciente, la violencia contra las poblaciones periféricas, contra los quilombos, indígenas y campesinos que aumenta día a día.

¹⁰ Informe de Conflictos en el Campo de 2017 (CPT, 2018).

¹¹ Informe de Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil de 2017 (CIMI, 2018).

¹² Informe de Racismo y violencia contra quilombos en Brasil (CONAQ, Tierra de Derechos, 2018).

¹³ Si comparamos los datos del Sistema de Alerta de Deforestación (SAD) del IMAZON correspondiente al periodo de agosto de 2016 y julio de 2017, en el que la deforestación de la Amazonia fue de 2.834 Km², con los datos del periodo de agosto de 2017 a julio de 2018, en el que la deforestación total fue de 4.221 km² (IMAZON, Fonseca, Salomão, Ribeiro y Souza, 2018), tenemos un aumento del 48,94%.

¹⁴ Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2018 (FBSP, 2018).

¹⁵ Informe de Personas LGBT asesinadas en Brasil de 2017 (GGB, 2018).

Franco, como sugiere el mismísimo ministro de Defensa Raul Jungmann).

Es en este escenario que un viejo político tradicional, que pasó aproximadamente treinta años como parlamentario sin notoriedad alguna, parte del llamado “bajo clero”, vino a ganar las elecciones presidenciales de 2018. Sin que participara de la gran mayoría de los debates, sin asistir a ninguno en el segundo turno, e incluso, sacando provecho político del atentado que sufrió, con un discurso de odio contra el “PT y el comunismo” (sic), señaló una mezcla de política ultraliberal, abiertamente subordinada a la política externa de los Estados Unidos y de conservadurismo –desde donde habla del respeto a las costumbres–, aprovechándose de las divisiones que el miedo produce en la sociedad.

Se colocó, así, contra la Reforma Agraria y las políticas ambientales, contra los indígenas, los quilombos y sus tierras y territorios, abogando por la militarización de las políticas de seguridad. Los tiempos-espacios de la violencia étnica, del ecocidio, de la esclavitud/racismo, del epistemicidio y del patriarcado, que forjaron el desarrollo del subdesarrollo de Brasil, se convierten abiertamente en programa de gobierno y ganan las elecciones.

De rentismos y protofascismos: la coyuntura poselectoral

Frente a las diferentes dimensiones de la crisis del acuerdo lulista y de sus posibilidades de acomodo de intereses, he allí que las clases dominantes, una vez más en dificultades para afirmar su dominación con el aval de las masas populares, nos ofrecen una nueva aventura, ahora con Jair Bolsonaro, cuyo único sector político significativo con el que puede contar es el soporte internacional del imperialismo estadounidense e, internamente, en determinado sector militar, como ha dejado bien claro el general Hamilton Mourão, electo vicepresidente. Al final, las demás fuerzas políticas que apoyaron la elección de Bolsonaro-Mourão, son políticamente inestables, aunque socialmente enraizadas, a saber, las iglesias evangélicas y sectores militares, algunos, incluso, con explícitas relaciones peligrosas con milicias. El caso Marielle Franco será su talón de Aquiles, pues, expone la relación entre milicianos y políticos, incluso de algunos que, en Río de Janeiro, apoyaron abiertamente a Jair Bolsonaro.

Desde el punto de vista de nuestra inserción en condición periférica al sistema-mundo, se observa un giro conservador de servidumbre voluntaria a la política imperialista de los Estados Unidos, tal como explicó el vicepresidente electo, general Mourão, cuando asume el principio de “seguridad hemisférica” como eje de la política exterior brasileña, principio central de la política de seguridad de EE. UU. Así, Brasil deja de tener una política de seguridad externa propia, pues, en la práctica, acepta cumplir la función que EE. UU. atribuye a las fuerzas armadas de sus aliados, cual es, el combate al narcotráfico y al terrorismo, en el que pasan a ser incluidos los movimientos sociales; en suma, a cuidar a los enemigos internos, tal como Colombia viene haciendo por décadas.¹⁶ Las fuerzas jurídicas y militares, en esos términos, tienden a una aproximación, especialmente a partir de dos ejes comunes: criminalización de los opositores y fuerte realineamiento a los intereses de Estados Unidos.

Se puede ganar elecciones con boutades del tipo “para cerrar el Supremo Tribunal Federal basta un cabo y un soldado”, “vamos a acabar con todos los petralhas” o con invenciones como el kit gay, pero

¹⁶ Considérese que recientemente Colombia ha pasado a formar parte de la OTAN.

no se gobierna con eso. El culto al odio y a la violencia, que se torna todavía más amenazador cuando se propone la liberación del porte de armas, ya se hizo presente en las calles, y ese protofascismo debe servirnos de alerta. Como tal, es el anuncio de un régimen fascista que, a pesar de ello, depende de la evolución de la coyuntura para concretizarse. No obstante, la metáfora del huevo de la serpiente nos aconseja que no dejemos de considerar esta posibilidad en el horizonte político, a pesar de que aún hay un recorrido para eso, y para evitarlo, estamos frente a la tarea de la amplia movilización activa de las fuerzas populares para democratizar la democracia que no tenemos, tal como lo demuestran en demasía las instituciones que allí están. Al final, los grandes medios, el sistema judicial y el legislativo, son un verdadero espejo de la sociedad si consideramos que el espejo es, siempre, la imagen invertida de la realidad.

Continuidades en la discontinuidad se asientan. La continua asociación a los intereses del capital banquero-financiero (con Paulo Guedes como súper ministro de Economía), tiende a una privatización total y a la profundización de la neoliberalización en curso. Por otro lado, la crisis social que está instalada y continuará profundizándose por el norte neoliberal/privatista del Gobierno, insinúa la continuidad de la despolitización de la pobreza, aunque de un modo distinto, ahora, por la disputa de la base social del lulismo a través del fortalecimiento de las iglesias evangélicas.

La perspectiva de eliminación de las fuerzas de oposición por la vía de la criminalización de sus líderes, a través de la ampliación de los métodos del Lava Jato hacia el conjunto del sistema judicial, parece ser la tónica del nombramiento de Sergio Moro como ministro de Justicia y Seguridad Pública, lo que también se suma a la criminalización en masa de los movimientos sociales. La continuación del proyecto de acumulación rentista por la vía de los negocios del agro, de las aguas y de la minería, tiende a ganar contornos aún más militarizados por la indicación de militares para ministerios estratégicos (como los de Defensa, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, e Infraestructura), en un intento cada vez mayor de flexibilización de las leyes ambientales y de reversión de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades tradicionales, lo que conduce a una preocupante elevación de la violencia (que ya es alarmante) contra indígenas, pobladores de quilombos y campesinos, especialmente en la Amazonia.

¿Está en curso una nueva militarización de la cuestión agraria? Esta expresión, acuñada por José de Souza Martins (1984), señalaba que el problema no está en la tierra en sí, sino en impedir que la lucha por la tierra ponga en cuestión el pacto político que la concentración de la propiedad de la tierra sustenta. Como ya afirmaba Maria da Conceição Tavares, al final de la década de 1990, nuestra peculiar revolución burguesa mantuvo un pacto de dominación férreo entre los dueños de la tierra, el Estado y los dueños del dinero, recurriendo periódicamente a golpes militares o a intervenciones salvacionistas que no solo mantuvieron este pacto de poder conservador, sino que impidió una acumulación política de fuerzas populares capaz de producir un verdadero orden democrático (Tavares, 2000).

Presentando como eje central la defensa de la propiedad privada, y no su función social, se mezclan un conjunto de acciones; desde el proyecto de ley que pretende tipificar movimientos sociales como terroristas, pasando por la propuesta de revocatoria de la enmienda constitucional 81 que, entre otras cosas, prevé la expropiación de propiedades urbanas y rurales en flagrante esclavitud; hasta la libre interpretación de instrumentos jurídicos, tales como el artículo 1210 del Código Civil, leído para la

legitimación del uso de la fuerza en la restitución de posesión de propiedades; del artículo 932 del Código de Proceso Civil, llamado Interdicto Prohibitorio, usado como preventivo a partir de amenazas implícitas o explícitas a la propiedad; asimismo, la inclusión de líderes de movimientos sociales en el Código Penal a través del artículo 345 que trata sobre el ejercicio arbitrario de sus propias razones. Sin embargo, es durante las operaciones de desalojo, que por vía de regla son promovidas por la policía, que históricamente se han configurado como situaciones a partir de las cuales se han producido las masacres; no olvidemos la de Eldorado de los Carajás en 1996 o la de Palo de Arco en 2017, en las que la violencia policial pudo producir, casi de inmediato, varias víctimas de este proyecto de Brasil en el que la propiedad privada igual está siendo falsificada y es fruto del robo de tierras públicas, aunque en su interior se practique trabajo esclavo y no cumpla ninguna función social: es la disculpa para crímenes de Estado que tornan legal la barbarie.

El Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) –que entre 2011 y 2014 tenía cerca de 120 parlamentarios, aumentados hasta 245 entre 2015 y 2018–, aunque habrá reducido el número de parlamentarios hasta 117 a partir de 2019 –sin contar con varias adhesiones que cambiaron–, tiende a no perder su fuerza, principalmente, por cuenta de las bancadas que más crecieron (la del “caramelo” con 103 parlamentarios y la evangélica con aproximadamente 91 parlamentarios), quienes se aproximaron a las pautas del Frente.

La flexibilización de legislaciones ambientales y el ataque a los derechos territoriales de indígenas, quilombos y campesinos como pauta legislativa, se enlazan, como nunca, al bandolerismo social de grandes latifundistas que, blindados por la impunidad y con la complicidad de la policía, a veces por milicias, están autorizados para matar cada vez más. Los globos de ensayo de los gobiernos petistas que, en 2009, ya habían autorizado la regularización de tierras públicas ocupadas desde 2004 en el límite de 1500 hectáreas, acelerados por el gobierno de Temer, que en 2017 extendió la regularización hasta tierras públicas ocupadas desde 2011 y hasta 2500 hectáreas, ganan contornos dramáticos en el gobierno de Bolsonaro por la sacralización moralizante de la relación entre la propiedad y las armas. Las manos que deshacen y recrean las leyes, también autorizan la muerte. Coralinos blancos y uniformes, movidos por la orden de la propiedad privada, hacen brotar sangre.

La militarización de la sociedad, que ya estaba en curso, tiende a ir más allá de la cuestión agraria y a obtener fuerza por la legitimidad política que la pauta de la violencia ha ganado, no solo con la victoria de Bolsonaro, sino con el crecimiento de la llamada “bancada del caramelo”, de 36 parlamentarios entre 2015-2018, hasta 103 (93 diputados federales y 10 senadores) en la legislatura de 2019-2022.

Esta militarización, heredera de los tiempos-espacios del etnocidio, de la esclavitud/racismo, del epistemicidio, ecocidio y del patriarcado, instrumentada por los focos selectivos de los medios, crea una distribución espacial de las tácticas de violencia de las fuerzas policiales; o sea, en la sociedad del espectáculo, lo que se ve se reprime, pero lo que no se ve se mata. La luminosidad de ciertos espacios garantiza una munición más leve, no por eso deja de ser violenta y, a veces, letal. Por su parte, la opacidad de otros espacios, construida por una indiferencia consentida por los grandes vehículos de los medios, los transforma en zonas de muerte, y así, Brasil ha ido creando sus zonas de exterminio. En el interior de la Amazonia, así como en la periferia de las grandes ciudades, aquellos que luchan por los derechos y que aún construyen relaciones de sentido intensas con la tierra, con la selva, con las aguas,

con la ciudad, son enterrados en la fosa común de la indiferencia por la sacralización de la mercancía y de la propiedad privada.

Esta vía de la militarización de la sociedad por las policías –que incluye múltiples intereses, muchas veces contradictorios entre sí, de milicias que no garantizan ningún comando central, sino lógicas situacionales y coyunturales del uso de la fuerza y la violencia–, gana legitimidad, no solo por la defensa de la propiedad privada, como ya vimos, sino también en los discursos sobre la seguridad pública. La propuesta de dispensar policías por muertes en confrontaciones se presenta discursivamente como mecanismo jurídico para legitimar un engranaje de matar y morir de una policía que, en 2017, mató un 19% más que en 2016 con 5.012 muertes, sino que también murió: 385 asesinatos de policías se produjeron en el mismo año (FBSP, 2018).

Frente a la frase “Bandido bueno es el bandido muerto”, popularizada por un periodista-político-policial, el Sr. José Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, más conocido como Sivuca, tal vez sea hora de preguntarnos, frente a los efectos políticos que este tipo de sentimiento genera en la actual coyuntura, por qué el bandido bueno es el bandido muerto. Veamos un caso registrado en la década de 1990 que puede ser revelador del significado de esta frase, hoy ampliamente difundida por el llamado “periodismo de verdad” de José Luiz Datena y Wagner Montes. Un muchacho –que se vio amenazado por policías que subían el Morro de los Placeres, en el barrio de Santa Teresa en Río de Janeiro, todavía en el gobierno de Marcello Alencar–, gritó en alto y a buen tono a los policías que lo perseguían: “¿Qué van a hacer ahora, me van a detener o acusar como hicieron ayer?”. Tal vez, aquí se entienda por qué el bandido bueno sea el bandido muerto, toda vez que el bandido vivo habla y da declaraciones que podrían comprometer a la policía que, eventualmente, el día anterior lo había detenido y acusado injustamente. Así, mientras la sociedad continúe aceptando la idea de que matar al bandido resuelve, el bandidaje se reproducirá con el aval de manos policiales que necesitan de la violencia como cultura y, más grave aún, cuando la cultura de la violencia inspira una política de gobierno.

Todo este escenario se agrava por el espectro de un anti-intelectualismo tropical, definido por Acselrad como un proyecto “que naturaliza y justifica la distribución de las personas según estatus desiguales [...] [y que] rechaza el debate intelectual cuando este se aplica a la búsqueda de la superación de las desigualdades” (2018, s/p).

La campaña deshonesta de los grandes medios en contra de la Universidad Pública, luego del incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro, al culpar a una institución que en 2016 recibió 53 millones de reales de presupuesto y que en 2018 cayeron en el orden de los 6 millones, revela la saña privatista del anti-intelectualismo en relación a la educación pública, ya sea para ampliar el lucro de los grandes grupos educativos privados, ya como enfrentamiento a las fuerzas opositoras y de pensamiento crítico. Tal reacción pone en la mira a la universidad como institución pública y las prácticas de educación popular de interacción entre los pueblos y las comunidades con el sistema público y los diferentes niveles de enseñanza, tales como la educación en el campo o la educación escolar indígena, que se encuentran bajo la amenaza de una visión política privatista y doctrinaria, que es lo mismo que decir “escuela sin partido”.

La rueda del capitalismo a la brasileña, que gira por el rentismo de la expansión de los commodities

y por las ganancias estratosféricas del sistema banquero-financiero, incrementada por un anti-intelectualismo tropical y habitada por los tiempos-espacios de la violencia étnica, del ecocidio, de la esclavitud/racismo, del epistemicidio y del patriarcado, se torna absolutamente regresiva para las masas populares, porque además contribuye a forjar un protofascismo que, repetimos, nos debe servir de alerta.

Por lo mismo, respetando las diferencias entre los momentos histórico-geográficos de 1954, con el suicidio de Getúlio Vargas, de la elección de Jânio Quadros, del golpe de 1964 y los veintidós años de dictadura, de la elección de Collor de Mello, del golpe de 2016 y, ahora, de la elección de Jair Bolsonaro, la coyuntura de pérdida para los más pobres y vulnerables no es ninguna novedad, muy a pesar de su agravamiento en el presente, pues aún sabemos que la superación de las crisis del capitalismo repone sus contradicciones de modo más ampliado, tal como nos enseñara Karl Marx. Pero esta certeza teórica ampliamente anclada en la experiencia empírica, no nos es suficiente para tener una fuerza histórica anclada en las prácticas populares, porque a fin de cuentas, ¡No basta con tener razón teórica sin tener razón histórica!

La tempestad del progreso anda y realmente nos está llevando a la catástrofe, tal como alertara Walter Benjamin (1993), como un aviso de incendio. Corresponde a nuestra generación enfrentar la expresión actual de la catástrofe, despertar ante las centellas del pasado que nos enseñan lo que no debemos hacer. Corresponde a nuestra generación hacer hablar nuestras historias y geografías del terror para lograr ver todo aquello que r-existe, otras posibilidades para nuestro caminar.

Desubicando las referencias histórico-geográficas: por otros horizontes de sentido

Ustedes, blancos, dicen que nosotros, Yanomami, no queremos el desarrollo. [...] nosotros no estamos contra el desarrollo; nosotros solo estamos contra el desarrollo que ustedes, blancos, quieren empujar por encima de nosotros [...]. Para nosotros, desarrollo es tener nuestra tierra sana, permitiendo que nuestros hijos vivan de forma saludable en un lugar lleno de vida. Ustedes dicen que somos pobres y que nuestra vida va a mejorar [...]. Solo porque somos diferentes de ustedes, que vivimos de forma diferente, que damos valor a cosas diferentes, eso no quiere decir que seamos pobres. Nosotros Yanomami tenemos otras riquezas dejadas por nuestros antiguos y que ustedes, blancos, no consiguen entender: la tierra que nos da vida, el agua limpia que tomamos, nuestros niños satisfechos. (Davi Kopenawa Yanomami)

¿Será que no tenemos nada que aprender de Davi Kopenawa Yanomami? ¿Su sentido del desarrollo, su noción de riqueza, su forma de comprender hombres, animales, selva, suelo y subsuelo como unidad existencial, sin jerarquías, en fin, habría algo en su pensamiento que nos desubicaría de los centros de referencia a partir de los cuales históricamente fueron pensados los proyectos de desarrollo para el Brasil?

Para ir más allá de la lectura aún prisionera del periodo de la guerra fría, que acostumbra remarcar, principalmente, la derrota de las fuerzas anticapitalistas con la caída del muro de Berlín en la década de 1990, es bueno que se diga que esta década también estuvo marcada por grandes movilizaciones

populares en América Latina, que deslegitimaron las políticas de carácter neoliberal rentista que imperaron en el periodo.

De cierta forma, la crisis de las izquierdas afectadas por la caída del muro, proporcionó, al mismo tiempo, la emergencia de otros grupos sociales, como los pueblos y nacionalidades indígenas, hasta entonces no debidamente considerados, incluso por la hegemonía de cierto tipo de marxismo en el campo de las luchas populares.

Los pueblos y comunidades indígenas, campesinos de varias formaciones (seringueiros, quebradoras de coco babaçu, comunidades de fundos de pasto, limpiadores, entre otros), los sin tierra, quilombos y los trabajadores de las periferias urbanas, fueron, desde 1989, año de la caída del muro, protagonistas de grandes movilizaciones populares que marcaron las luchas sociales en América Latina en la década siguiente. Como no recordar el sangriento 27 de febrero de 1989 conocido como El Caracazo, la primera gran manifestación de las periferias urbanas contra las políticas neoliberales de la que se tiene noticia en el mundo. En fin, mientras el muro caía, las masas populares se levantaban en América Latina; tengamos eso en cuenta por las implicaciones que tiene en la lucha de clases en nuestro continente y porque nos ofrece un nuevo horizonte teórico-político.

La consigna de la lucha “Por la Vida, Por la Dignidad y Por el Territorio”, que se podía leer en las calles en las dos grandes marchas de 1990, en Bolivia y en Ecuador, ubicaba otros horizontes teórico-políticos que rompían con el eurocentrismo del lema de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” de donde emanan las derechas y las izquierdas tradicionales, en crisis desde entonces. Cada vez se habla más de: 1) soberanía de los pueblos y no simplemente de pueblo; 2) no solamente de Estado-nación sino de plurinacionalidad, de Estado plurinacional; 3) de vida en plenitud (Sumaq Qamaña, en aimara, o Sumak Kawsay, en quechua) como alternativas al desarrollo y no de desarrollo; 4) de lucha por el territorio más que de lucha por la tierra; y 5) más que de derechos humanos se habla del derecho a la vida humana y no humana, en fin, también de los derechos de la naturaleza. No hay como no ver aquí una descolonización del pensamiento-acción en una lucha teórico-política que se enfrenta con las derechas y las izquierdas tradicionales en su crítica al capitalismo y a la colonialidad.

Estas movilizaciones, poniendo en cuestión el Consenso de Washington y, después, el Consenso de las Commodities, expresiones del consenso de las clases dominantes en torno al rentismo y la inserción subordinada en el sistema-mundo, expusieron el talón de Aquiles de un pacto de poder que es, ante todo, un cerco a los territorios de pueblos y comunidades tradicionales y de campesinos, pero también de las comunidades de las periferias urbanas. Estos territorios no deben ser vistos como trabas al desarrollo capitalista sino como espacios de r-existencia, apuntando hacia las posibilidades de nuevos proyectos societarios y de construcción de otras fuerzas políticas capaces de implementarlos. Por significar cambio están bajo la mira del nuevo Gobierno.

Por eso, insistimos en que es necesario democratizar la democracia retomando su sentido profundo, tal como la definió Abraham Lincoln (1809-1865), como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, y si así es, ya debe de frentón incorporar la contribución que los propios pueblos en r-existencia vienen señalando, comenzando con el pueblo en plural, es decir, como pueblos, superando el colonialismo interno y la colonialidad que lo constituye, que descalifica la diversidad de pueblos, de

territorialidades que habitan los territorios de los Estados que se pensaban/piensan como mononacionales. En este sentido, la cuestión étnico-racial gana centralidad política, por el lugar que tienen en la conformación de la estructura de poder del sistema-mundo capitalista, conforme destacó Aníbal Quijano.¹⁷

Aún debemos saber ubicar verdaderamente en nuestro horizonte estratégico el buen combate al patriarcalismo. En este sentido, Rita Segato nos advierte:

[...] por encima de todo, no se tocó el orden patriarcal. No olvidemos que ese orden político es arcaico y fundacional para todas las formas de opresión en la larga prehistoria patriarcal de la humanidad que llega hasta el presente. Son nuestros antagonistas de proyecto histórico quienes nos lo están diciendo con su reacción fundamentalista. Esa base, ese cimiento, esa plataforma, no puede ser tocada, y hasta ahora el ideario socialista puesto en práctica no lo ha hecho, pues no es meramente emplazando mujeres en los recintos estatales que se logra –el Estado, con sus protocolos, siempre acaba capturándonos, institucionalizándonos–. Debemos entender bajo esta luz el significado de la irrupción del feminismo en las calles como la entrada en escena de una nueva forma de la política que parte de la sociedad y recupera una historia de politicidad comunal, represada por todo el tiempo de la colonial modernidad. (2018, s/p)

Y no lo será separando clase y género. Al final, la clase no se resume al lugar de la producción como se creyó. El trabajo no pagado de la mujer cuidando de la prole, cocinando, atenta a los primeros cuidados de la salud, garantizando la reproducción de la familia, siendo un trabajo no pagado tiene mucho más valor. Más que la producción tenemos que considerar la reproducción no solo del capital, sino de la familia proletaria, considerando a quien cuida de la prole, como proletaria que es, en este mundo patriarcal. En fin, considerar además del trabajo, la vida; además de la producción, la reproducción. Género y clase al mismo tiempo sin dilución de uno en el otro.

Y más aún en este complejo proceso de reconfiguración societario del capitalismo contemporáneo, en el que la demanda directa del capital por el trabajo activa formas arcaicas, pero también ultratecnológicas y de superexplotación, las que resultan más agravadas en la periferia y en Brasil, particularmente, luego del Plan Real, con la desindustrialización, lo que algunos autores han considerado como precarización dada la dimensión de la precariedad de los regímenes y procesos de trabajo. De tal manera que aunque crecen iniciativas de economías populares con base en la reciprocidad, también es cierto que conviven con formas de servidumbre y hasta de esclavitud, en un proceso de aceleración de la extrema concentración de la riqueza en la sociedad brasileña.

Si retomamos la premisa de que “la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores”, tal como sugirió Karl Marx, el primer paso es evaluar el momento de la autoorganización en la que se encuentran estas fuerzas. Tomando como referencia los intentos de resistencia al proceso actual, sobre todo en la lucha en contra del impeachment, estamos obligados a concluir que las manifestaciones populares fueron, en su mayoría, articuladas por la negación (contra el golpe, contra el despojo de derechos y #EINo) y restringidas a la escena electoral, aunque algunas de sus demandas,

¹⁷ En el proceso de colonización de América Latina, por medio de la colonialidad del poder, se crearon identidades sociales nuevas, como indios, negros y mestizos, para, deliberadamente y de forma violenta, unificar la diversidad cultural y epistémica de esta región y, a partir de la idea de raza, legitimar relaciones de dominación marcadas por criterios de superioridad/inferioridad entre los dominantes y los dominados, definiendo una división racial del trabajo, pero fundamentalmente estableciendo el control europeo de todas las formas de subjetividad, cultura y producción de conocimiento hasta entonces establecidos. (Quijano, 2009).

particularmente las que se alimentaron de los movimientos feministas, han sido fundamentales para la ampliación de horizontes. Como vimos, las protestas, especialmente de 2013, señalaron una amplia agenda de reivindicaciones, pero sin construir una fuerza social portadora de un proyecto de afirmación y con capacidad/legitimidad de unificación/articulación de las luchas. Los intentos de construcción de los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, aunque expresan experiencias interesantes, quedaron igualmente limitados, entre otras razones, por su dificultad de salir de la agenda electoral y partidista.

Un giro se hace necesario, y las palabras de Davi Kopenawa Yanomami piden paso.

A lo que nos referimos es que no puede haber cambios sin escuchar a los pueblos, sin un giro territorial, sin una desubicación de nuestras referencias espacio-temporales, sin reconocer que las más de 85 millones de hectáreas de asentamientos agrarios, las más de 110 millones de hectáreas de tierras indígenas y las cerca de 44 millones de hectáreas de los territorios de los quilombos, no son nuestras trabas sino nuestras soluciones, pues son nuestros patrimonios acumulados que es de donde debe partir el proyecto de un Brasil que no sea servil a los marcos del sistema-mundo moderno-colonial.

Uno de los grandes desafíos es transformar a los asentados en sujetos políticos y no solamente en clientes o beneficiarios del Estado y de la Reforma Agraria tutelada, como ha sido hasta ahora. Si sumamos al área plantada con soja, caña, millo y eucalipto, las principales del latifundio empresarial – agronegocio–, no llegan a más de 85 millones de hectáreas conquistadas en asentamientos, pero la experimentación agroecológica nos habla de que es posible comer sin veneno y vivir con más autonomía.

Son, aún, 110 millones de hectáreas de tierras en manos de pueblos y comunidades indígenas en un país como Brasil, donde viven 305 etnias/pueblos indígenas, lo que nos coloca frente al desafío de asumirnos como el país de mayor diversidad de pueblos y comunidades indígenas de toda América. Solo para efectos de comparación, Bolivia, donde el 60% de la población se asume como indígena, tiene 34 pueblos/nacionalidades indígenas, esto es, cerca del 10% de lo que tenemos en Brasil, y muchos de estos pueblos comienzan a mostrarnos los límites del indigenismo y a protagonizar prácticas propiamente indígenas, como la autodemarcación de sus tierras, de sus territorios e, igualmente, con la creación de protocolos internos que apuntan hacia formas de autonomía política, como lo han hecho los Mundurucus y otros pueblos.

Son, también, más de 50 millones de hectáreas ocupadas por pueblos y comunidades tradicionales, entre los que se cuentan los quilombos, las comunidades fundos y cierres de pasto de Bahía, los limpiadores del Paraná y de Santa Catarina, las mujeres quebradoras de coco babaçu o las recolectoras de mangaba de Sergipe. En fin, todo un conjunto de pueblos y comunidades que cada día ven sus territorios invadidos por el agronegocio, el avance de la minería, la especulación inmobiliaria urbana y las empresas eólicas e hidroeléctricas, empero continúan apuntándonos hacia otra gramática territorial realmente distante de los signos de la propiedad privada y de las existencias atomizadas, al organizar la vida por territorios de uso común, colectivizando el sentido de sus existencias.

Y todo esto aún encuentra amparo en una amplia lucha que se traba a escala global. Recientemente, en septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) en Ginebra, tomó la decisión histórica de aprobar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las Zonas Rurales. Por primera vez, en la legislación internacional, son reconocidos un conjunto de derechos de campesinos y trabajadores rurales (incluyendo pastores, migrantes y trabajadores rurales sin tierra), como el derecho a la no discriminación, a la alimentación saludable, al acceso a la tierra, a conservar sus tierras y territorios, a no quedar expuestos a los agrotóxicos en sus trabajos y a obtener créditos agrícolas, educación, información y otros derechos. Aún más, establece que estos actores deben ser consultados e invitados a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado antes de tomarse decisiones, no solo sobre proyectos sino también sobre leyes y programas que los afecten.¹⁸

Las r-existencias localizadas aumentan por todos lados e, igualmente, un sentimiento de “Ya basta” se hace notar, y no solo en las elecciones, como se pudo ver en las Correntinas al oeste de Bahía, en noviembre de 2017, cuando aproximadamente 1000 personas ocuparon la hacienda Igarashi, una empresa modelo del agronegocio, destruyeron sus equipos de apropiación del agua por su exagerado consumo, dicho sea de paso, formalmente otorgado por el Gobierno del Estado bajo una coalición política liderada por el PT. Nueve días después de aquella acción de “digna rabia”, como se dice en español, una manifestación de más de 12 mil personas salió a las calles de Correntina, un municipio de 33 mil habitantes, para apoyar aquella acción señalada por los agronegociantes, sus entidades e intelectuales orgánicos, como realizada por terroristas y vándalos (Porto-Gonçalves y Britto, 2018). ¿Reflejo de la coyuntura? Interesante que estas fuerzas se hayan movilizado tan radicalmente o actuado en contra del Gobierno del PT y en contra del régimen de acumulación que tienen los agronegociantes, las mineras y su apetito de tierras contra los territorios de los asentados, de los pueblos y comunidades tradicionales.

Como vemos, no partimos de cero. Hay un ensayo de país que viene del Brasil profundo y con implicaciones en luchas que se enlazan en todo el mundo. Es con él que habremos de encontrarnos, escuchándolo. El gesto de la escucha nos obliga a aproximarnos a quienes queremos escuchar, al contrario de la visión a lo lejos que se aparta de lo mundano.

Es doloroso, pero la autocrítica y el conocimiento de la historia son la única garantía de poder caminar hacia una sociedad de mayor bienestar para más personas. Sin hacerlo andaremos en círculos convencidos de que tomando el Estado, por las armas o por las urnas, podremos reorientar la historia en otra dirección. Nunca se ha probado cierto. En ningún lugar. Aníbal Quijano, el gran sabio peruano recientemente fallecido, tenía una fórmula para la acción en el campo estatal: adentro y en contra. Yo creo que el camino es anfibio también en la política. Dentro del Estado, que siempre acaba traicionándonos, buscar las brechas, las fisuras, para convertirlas en clivajes capaces de romper el cristal institucional, siempre colonial en América Latina, es decir, siempre exterior en su gestión de la vida de los pueblos y territorios. Pero no olvidar que el cambio se hace en la sociedad y lo hace la gente. Y eso es lo que ha fallado: no se trabajó la conciencia colectiva, no se cambió la gente, a pesar de que se mejoró la vida de las mayorías. (Segato, 2018, s/p)

¹⁸ La declaración fue aprobada el 20 de noviembre de 2018 en Nueva York por una amplia mayoría del Comité de las Naciones Unidas sobre el tema y fue remitida para su aprobación por la Asamblea General de la ONU en diciembre. En la misma reunión, también fue aprobado otro documento que amplía la definición y proceso de “consentimiento previo, libre e informado” de los pueblos indígenas, estableciendo que para obtener tal consentimiento, los Estados deben “consultar y cooperar de buena fe” con los pueblos indígenas, mediante las formas de representación propias de los pueblos, en un proceso justo para decidir si otorgan o no su consentimiento antes de que proyectos y leyes que afectarán sus territorios y recursos comiencen, y antes de que se ejecuten. (Ribeiro, 2018)

Si realmente queremos superar el grave cuadro que se nos presenta es preciso que sepamos aprender de nuestros errores y que, de una vez por todas, reconozcamos que la conciencia no viene de afuera –como cierta izquierda hasta ahora ha repetido hasta la náusea–, y aunque estemos de acuerdo que sin teoría revolucionaria no habrá ninguna transformación digna de ese nombre, es necesario afirmar que es de otras praxis de las que carecemos, y que praxis no es lo contrario a la teoría. Es teoría que emana con la práctica y que, como tal, no puede venir de fuera.

Que debemos reconocernos en nuestra tropicalidad y mirar con la enorme responsabilidad que poseemos, por el significado que la Amazonia y sus pueblos tienen para la humanidad, en vez de acompañar de modo ideológicamente automático a la política externa de los Estados Unidos. Pues no habrá proyecto de futuro si no reconocemos que fueron estas etnias, pueblos y nacionalidades –que habitan la Amazonia desde, por lo menos, 19 mil años en la actual Colombia (formación Chiribiquete) y 11 mil 200 en el actual Brasil (sitio de Piedra Pintada, en Monte Alegre, Pará)–, las que construyeron un rico acervo de conocimientos que han garantizando, hasta ahora, que la mayor selva tropical del mundo continúe cumpliendo su función en el equilibrio metabólico del planeta, sobre todo por el agua, que por evapotranspiración irriga amplias regiones del país, del continente y del mundo.

Además, el hecho de ser el mayor país tropical del mundo, nos obliga a una política externa propia, pues la condición de tener la mayor área expuesta a la energía solar no es cualquier cosa, en un momento en que la humanidad se ve frente a la disyuntiva de buscar alternativas a la matriz fósil. Sea por razones climáticas, sea por razones democráticas, ofrecer otras matrices energéticas puede significar evitar la concentración de poder que el monopolio de las tecnologías históricamente ha proporcionado.

Que este sea el fin, mandar obedeciendo y aceptar que el horizonte estratégico que se anuncia, necesariamente, será de un mundo donde quepan muchos mundos, tal y como sugieren los sentidos y colores de las banderas de la Wiphala y de la Vía Campesina y arco iris de otros movimientos, como el LGBT.

La líder quilombola Rejane Oliveira ya nos dio el mensaje: “Tenemos en las manos generaciones, somos guardianes de esta tierra. Nuestro deber es gritar y no quedarnos callados”. El grito repone en el mapa los silencios de la historia anunciando dónde nos perdimos en el camino.

LISTA DE REFERENCIAS

Acsegrad, H. (21 de septiembre de 2018). Espectros do anti-intelectualismo tropical. *Le Monde Diplomatique Brasil*. Recuperado de <https://diplomatique.org.br/espectros-do-anti-intelectualismo-tropical/>
Benjamin, W. (1993). *Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política*. (6ª Ed.). San Pablo: Brasiliense.

Boito Jr., A. (2018). *Reforma e crise política no Brasil: os conflitos de classe nos governos do PT*. San Pablo: UNESP.
Brum, E. (11 de abril de 2018) *Lula, el inconciliable*. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/04/11/america/1523483016_084486.html

- Cabanes, R., Georges, I., Rizek, C. y Telles, V. (Eds.). (2011). *Saídas de emergência, ganhar/perder a vida em São Paulo*. San Pablo: Boitempo.
- Comisión Pastoral de la Tierra [CPT]. (2018). *Conflitos no Campo Brasil 2017*. Goiânia: Autor.
- Consejo Indigenista Misionero [CIMI]. *Relatório. Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2017*. Brasília: Autor.
- Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas [CONAQ], *Tierra de Derechos*. (2018). *Racismo e violência contra quilombos no Brasil*. Curitiba: Terra de Direitos.
- Faoro, R. (2001). *Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro*. (3ª Ed.). Rio de Janeiro: Globo.
- Foro Brasileño de Seguridad Pública [FBSP] (2018). *12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. San Pablo: Autor.
- Frank, A. G. (1973). *Desenvolvimento e subdesenvolvimento latino-americano*. En: L. Pereira (Comp.), *Urbanização e subdesenvolvimento* (pp. 25-39). Rio de Janeiro: Zahar.
- Grupo Gay de Bahía. (2018). *Pessoas LGBT mortas no Brasil. Relatório 2017*. Salvador: Autor.
- Grupo Havan. (2018). *Nossa história*. Recuperado de <https://cliente.havan.com.br/Portal/Institucional/LinhaDoTempo>
- Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia [IMAZON], Fonseca, A., Salomão, R., Ribeiro, J. y Souza Jr., C. (Invs.) (2018). *Ameaça e pressão de desmatamento em Áreas Protegidas: SAD agosto de 2017 a julho de 2018*. Recuperado de: https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/02/%C3%81rea-e-Press%C3%A3o-AGO_OUT2018.pdf
- Lautier, B. (2014). *O governo moral dos pobres e a despolitização das políticas públicas na América Latina*. *Caderno CRH*, 27(72), 463-477.
- Leite, A., Castro, L. y Sauer, S. (2018). *A questão agrária no momento político brasileiro: liberalização e mercantilização da terra no estado mínimo de Temer*. Okara: *Geografia em Debate: "Dossiê Michel Temer e a Questão Agrária"*, 12(2), 247-274.
- Martins, J. (1984). *A militarização da questão agrária no Brasil*. Petrópolis: Vozes.
- Paulani, L. (2008). *Brasil Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico*. San Pablo: Boitempo.
- _____ (2013). *Acumulação sistêmica, poupança externa e rentismo: observações sobre o caso brasileiro*. *Estudos avançados*, 27(77), 237-261.
- Porto-Gonçalves, C. y Britto, S. (2018). *Os pivôs da discórdia e a digna raiva: uma análise dos conflitos por terra, água e território em Correntina – BA*. Documento de trabalho, inédito.
- Quijano, A. (2009). *Colonialidade do poder e classificação social*. En: B. Santos y M. Menezes (Coords.), *Epistemologias do Sul* (pp. 73-118). Coimbra: Almedina.
- Ribeiro, S. (24 de noviembre de 2018). *Derechos campesinos y consultas sin derechos*. *La Jornada*. Recuperado de <http://www.jornada.com.mx/2018/11/24/opinion/023a1eco#>
- Santos, M. (2005). *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record.
- Segato, R. (2018). *Limitaciones de los gobiernos de Lula y Dilma*. *Le Monde Diplomatique: "Anatomía del liberalismo"*, (número especial, noviembre-diciembre).
- Svampa, M. (2015). *Commodities Consensus: Neoextractivism and Enclosure of the Commons in Latin America*. *South Atlantic Quarterly*, 114(1), 65-82.
- Tavares, M. (2000). *Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes*. En: M. Tavares (Coord.), *Celso Furtado e o Brasil* (pp. 129-154). San Pablo: Fundação Perseu Abramo.
- Wallerstein, I. (2004). *O declínio do poder americano: os Estados Unidos em um mundo caótico*. Rio de Janeiro: Contraponto.